



**INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL  
CONSEJO GENERAL**

**EXPEDIENTE:** IEDF-QCG/PO/011/2013

**PROBABLE RESPONSABLE:** AGRUPACIÓN  
POLÍTICA LOCAL COMITÉ DE DEFENSA  
POPULAR DEL VALLE DE MÉXICO.

**RESOLUCIÓN**

México, Distrito Federal, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

**VISTO** el estado procedimental que guardan las constancias que integran el expediente al rubro citado, y

**RESULTANDO:**

**1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES 2013.** El veintitrés de mayo de dos mil trece, este Consejo General emitió el Acuerdo ACU-22-13, a través del cual aprobó el "Procedimiento de Verificación de las Obligaciones a que se sujetan las Agrupaciones Políticas Locales durante su existencia a revisar en el año dos mil trece" (Procedimiento de Verificación).

En dicho Acuerdo se instruyó a la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas (Comisión) para que iniciara el proceso de verificación y determinara cuáles obligaciones serían verificadas en ese año.

Derivado de lo anterior, en su Quinta Sesión Ordinaria de dos mil trece, la Comisión aprobó las obligaciones susceptibles de verificar; a saber:

1. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral, que cuenta con un domicilio social para sus órganos directivos, así como comunicar cualquier cambio de éste en un plazo no mayor a los treinta días naturales siguientes, a que se efectúe; y
2. Comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos, en un plazo máximo de tres meses una vez que ésta hubiera ocurrido.

Así, en concordancia con lo previsto en los numerales 17 y 20 del

1  
2014

Procedimiento de Verificación, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (Dirección) requirió a las agrupaciones políticas remitieran las constancias con las que se pudiera acreditar el cumplimiento de las obligaciones cuya verificación aprobó la Comisión.

Al término de la revisión de las constancias entregadas, y en cumplimiento a lo previsto en el numeral 10 del Procedimiento de Verificación, la Dirección presentó a la Comisión, un informe por cada agrupación política local verificada, en el que se dio cuenta con los resultados obtenidos.

En virtud de lo anterior, y en atención a lo establecido en el artículo 198, párrafo segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (Código), la Comisión acordó remitir a este Consejo General, los informes referidos.

De ahí que el veintisiete de noviembre de dos mil trece, este Consejo General emitiera el acuerdo ACU-052-13, aprobando los 38 informes presentados por la Comisión; y ordenando al Secretario Ejecutivo de este órgano electoral local (Secretario Ejecutivo), que atendiendo a cada caso particular, procediera en términos de lo establecido en los numerales 32 y 34 del Procedimiento de Verificación.

Ahora bien, es oportuno señalar que entre los informes aprobados se encuentra el concerniente a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México. En dicho informe se concluyó que la citada agrupación política no cumplió con la obligación de informar oportunamente la integración y renovación de sus órganos directivos; y por ende, que no cumplió con lo establecido en el artículo 200, fracción VIII del Código.

**2. PETICIÓN RAZONADA.** En atención al Acuerdo ACU-052-13 y, en concordancia con lo previsto en el artículo 30, fracción IV del Reglamento para el Trámite, Sustanciación y Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores del Instituto Electoral del Distrito Federal (Reglamento), mediante acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil trece, el Secretario

Ejecutivo formuló a la Comisión, la petición razonada de inicio de procedimiento ordinario sancionador en contra de la agrupación política local Comité de Defensa Popular del Valle de México.

En dicha petición, el Secretario Ejecutivo señaló que en términos del "Informe sobre la verificación del cumplimiento de obligaciones de la agrupación política local denominada Comité de Defensa Popular del Valle de México en el año dos mil trece" (Informe), aprobado en el ACU-52-13, la citada agrupación política incumplió con la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos. En virtud de lo anterior, la Secretaría Ejecutiva consideró que dicha omisión puede llegar a constituir una falta a la normativa electoral.

**3. ADMISIÓN, EMPLAZAMIENTO Y CONTESTACIÓN.** Mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil trece, la Comisión determinó acoger la petición razonada formulada por el Secretario Ejecutivo y, en consecuencia, iniciar el procedimiento ordinario sancionador que por esta vía se resuelve.

Asimismo, dicho órgano colegiado ordenó turnar el asunto a la Dirección a fin de que, en coadyuvancia de la Secretaría Ejecutiva, realizara las diligencias necesarias para la debida sustanciación del procedimiento de mérito; así como emplazara a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México en el último domicilio que dicha asociación política tuviera registrado ante este órgano electoral local.

En atención a lo mandatado por la Comisión, el cuatro de diciembre de dos mil trece, el notificador habilitado de la Dirección se constituyó en el último domicilio que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México registró ante este Instituto Electoral, con la finalidad de notificarle a su representante el inicio del procedimiento de mérito; así como el oficio IEDF-SE/QJ/062/2013, a través del cual el Secretario Ejecutivo emplaza a dicha asociación política.

Sin embargo, tal y como consta en el citatorio de cuatro de diciembre de dos

mil trece (foja 33 del expediente), no se encontró a persona alguna con la que se pudiera entender la diligencia. Por lo que en cumplimiento a lo previsto en el artículo 17, fracción III del Reglamento, se fijó en la puerta principal del inmueble, el documento por el cual se citó al Representante de la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México para que a las catorce horas del día cinco del mismo mes y año, se apersonara en el mismo domicilio a fin de que se pudiera entender la diligencia de notificación en comento.

Cabe mencionar que en atención a lo previsto en el artículo 17, fracción IV, inciso e) del Reglamento, a través del citatorio se apercibió al Representante de la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, en el sentido de que si en la fecha y hora previstas para atender la diligencia, no se encontrara persona alguna en el domicilio, se fijaría en la puerta principal copia de los documentos a notificar, sin perjuicio de que dicho acto también se notificaría en los estrados de este Instituto Electoral.

No obstante lo anterior, tal y como consta en la razón de notificación de cinco de diciembre de dos mil trece (foja 34 del expediente), una vez que el notificador se apersonó en el lugar, día y hora que fueron señalados en el citatorio, no se encontró al Representante de la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México.

En tal virtud, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17, fracción V del Reglamento, la diligencia se entendió con la persona que se encontró en el domicilio, quien se ostentó como integrante de la agrupación, entregándole copia del Acuerdo de inicio del presente procedimiento; del oficio de emplazamiento identificado con la clave IEDF-SE/QJ/062/2013; así como de la respectiva de cédula de notificación.

En virtud de lo anterior, mediante escrito de once de diciembre de dos mil trece, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México atendió el emplazamiento que le fue formulado, exponiendo las consideraciones que a su derecho conviene.

Cabe mencionar que en atención a lo ordenado por la Comisión en el citado acuerdo de inicio del presente procedimiento se publicó en los estrados de las 40 Direcciones Distritales de este Instituto Electoral.

**4. PRUEBAS, ALEGATOS Y CIERRE DE INSTRUCCIÓN.** Mediante Acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil trece, la Comisión proveyó sobre la admisión y desahogo de las pruebas que fueron ofrecidas, ordenando que se pusiera a la vista del presunto responsable el expediente, para que manifestara lo que a su derecho conviniera.

Asimismo, resulta oportuno mencionar que el trece de diciembre de dos mil trece, el Secretario Ejecutivo emitió la Circular No. 146, en la que informó que serían considerados inhábiles los días diecinueve de diciembre de dos mil trece al tres de enero del año en curso y, se suspendería la presentación, trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos competencia de este Instituto; por lo que no podría decretarse el desahogo de ningún tipo de diligencia; lo cual, resulta aplicable al presente procedimiento ordinario sancionador.

En consecuencia, esta autoridad electoral notificó al probable responsable el acuerdo de admisión de pruebas y vista para alegatos, el siete de enero del presente año. Cabe señalar que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, no realizó manifestación alguna en relación con la vista formulada.

En atención a lo anterior, mediante escrito de diez de enero de dos mil catorce, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México presentó los alegatos que a sus intereses convenían.

Así, una vez agotadas todas las diligencias, mediante acuerdo de diecisiete de enero de dos mil catorce, la Comisión ordenó el cierre de instrucción e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas elaborara el anteproyecto de resolución correspondiente.

**5. APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN.** En sesión

DR

celebrada el veintinueve de enero de dos mil catorce, la Comisión aprobó el anteproyecto de resolución atinente, con objeto de someterlo a la consideración de este Consejo General.

En virtud de que el presente procedimiento ha quedado en estado de resolución, este Órgano Superior de Dirección procede a resolver el presente asunto, de conformidad con los siguientes:

### CONSIDERANDOS:

I.- **COMPETENCIA.** Que en términos de lo dispuesto en los artículos 14, 16, párrafos primero y segundo y 116, fracción IV, incisos b), c), y n) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución); 120, 123, 124, párrafos primero y segundo y 136 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto); 1, párrafos primero y segundo, fracciones III y V, 3, 15, 16, 17, 18, fracciones I y II, 20, 25, 35, fracciones XIII, XIX y XXXV, 36, 37, párrafo primero, 40, 42, 43, fracción I, 44, fracciones I y III, 67, fracciones V, XI y XIV, 187, fracción I, 200, fracciones I y VIII, 373, fracción I, 374, fracciones V y VII, 376, fracción VI, 377, fracción I, en relación con su similar 379, fracción II, inciso b) del Código; 1, 3, 7, fracción II, 24, fracción I, 30, fracción IV, 31, fracción I, 43, 47 y 53 del Reglamento; y habida cuenta que se trata de un procedimiento ordinario sancionador incoado oficiosamente en contra de un sujeto obligado por la norma electoral local, este Consejo General es **competente** para emitir la presente resolución, y en su caso, imponer la sanción que proceda.

II.- **PROCEDENCIA.** Previo a ocuparse del estudio de fondo del presente asunto, lo pertinente es analizar si, en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia que impida a este órgano colegiado pronunciarse sobre la materia de este procedimiento. Lo anterior, toda vez que el estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público e interés general; y por tanto de análisis preferente.

Al ser un procedimiento iniciado de manera oficiosa por la Comisión, en primer

1  
↓  
DNE

lugar, se analizará que se hayan cumplido con las formalidades que exige el Reglamento para el inicio de los procedimientos sancionadores; lo cual, será referido en el apartado identificado con el inciso **A)**. En segundo lugar, deberá analizarse si se actualiza alguna de las causales de improcedencia que impida a este Consejo General pronunciarse sobre el fondo, ello se abordará en el apartado identificado con el inciso **B)**.

**A)** Tal y como consta de foja 25 a 30 del expediente, el dos de diciembre de dos mil trece, la Comisión determinó acoger la solicitud de inicio de procedimiento oficioso que le planteó el Secretario Ejecutivo, ya que en el acuerdo de petición razonada se advirtió que:

- El presunto infractor es uno de los sujetos obligados en el Código; en este caso, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México;
- Se presume la comisión de conductas que pueden constituir una falta a la normativa electoral, en específico a lo establecido en el artículo 200, fracción VIII, en relación con sus similares 377, fracción I y 379, fracción II, inciso b) del Código.
- Existen elementos que, cuando menos, generan indicios de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió la conducta.

Como puede colegirse, la Comisión consideró que en el expediente formado por el Secretario Ejecutivo, existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento administrativo sancionador en contra de la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México. Por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 31, fracción I del Reglamento, determinó iniciar un procedimiento ordinario sancionador, instruyendo a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección, realizaran su sustanciación.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, este Consejo General concluye que en este caso se cumplieron con las formalidades requeridas en el Reglamento, para el inicio oficioso de un procedimiento administrativo sancionador.

1  
DTC

B) Del análisis del expediente no se advierte que se actualice alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 36 del Reglamento, ya que: I) no se presentó alguna causal de desechamiento de las previstas en el artículo 35 del Reglamento; II) en el caso no opera el desistimiento de la causa, ya que es un procedimiento iniciado vía oficiosa; y, III) no se tiene constancia de que la asociación política Comité de Defensa Popular del Valle de México, hubiera perdido su registro como agrupación política en el Distrito Federal.

Ahora bien, es oportuno mencionar que al momento de ofrecer respuesta al emplazamiento que le fue formulado, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México no hizo valer ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento.

Así, al no advertirse que se actualice causal de improcedencia o sobreseimiento alguna, lo adecuado es analizar los hechos objeto del presente procedimiento oficioso, con base en los elementos que obran en autos.

**III. MATERIA DEL PROCEDIMIENTO.** Del análisis de la petición razonada formulada por el Secretario Ejecutivo de este Instituto y del acuerdo de la Comisión de dos de diciembre de dos mil trece, se desprende que:

El veintisiete de noviembre de dos mil trece, este Consejo General conoció de los informes en los que la Comisión aprobó los resultados y conclusiones de la verificación de las obligaciones a que se sujetaron las agrupaciones políticas locales en 2013, entre los que se encontraba el concerniente a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México.

De dicho informe, este Consejo General advirtió que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México no acreditó el cumplimiento de la obligación consistente en informar oportunamente la integración y renovación de sus órganos de dirección.

Por lo que mediante Acuerdo ACU-52-13, este Consejo General ordenó al

1  
↓  
DIR

Secretario Ejecutivo, procediera de conformidad con lo previsto en el numeral 32 del Procedimiento de Verificación; esto es, que presentara a la Comisión la petición razonada de inicio de un procedimiento sancionador por la posible violación a la normativa electoral.

Derivado de lo anterior, la Comisión determinó iniciar el procedimiento que por esta vía se resuelve, toda vez que de la valoración de la petición formulada por el Secretario Ejecutivo, advirtió la existencia de elementos suficientes que permiten suponer la violación a lo previsto en los artículos 200, fracción VIII, en relación con su similar 377, fracción I del Código.

Por otra parte, al ofrecer respuesta al emplazamiento que le fue formulado, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México señaló que en fecha once de diciembre de dos mil trece se convocó al Congreso Político Local Extraordinario, a efecto de elegir la integración de los órganos directivos de dicha agrupación, por lo que solicitaron a esta autoridad que se les concediera el tiempo necesario para llevar a cabo dicho proceso, precisando que tienen programada la realización del congreso correspondiente el catorce de enero de dos mil catorce.

En consecuencia, la **materia del procedimiento, considerando la competencia de este órgano electoral local**, radica en establecer:

- Si la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México incumplió con su obligación de Comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos, en un plazo máximo de tres meses una vez que ésta hubiera ocurrido.

En ese sentido, debe determinarse si dicha asociación política contravino lo previsto en los artículos 200, fracción VIII, en relación con su similar 377, fracción I del Código.

**IV. VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.** Previamente a ocuparse de las imputaciones en particular es oportuno desglosar los medios de prueba que

1  
V  
D12

obran en el expediente, a fin de establecer su naturaleza, valor y alcance probatorios.

Para llevar a cabo este estudio se dará cuenta de los medios de prueba que obran en el expediente, así como lo que de éstos se desprende, para finalmente valorarlos en su conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como de los hechos que sean públicos y notorios con fundamento en los artículos 38 y 40 del Reglamento.

En ese sentido, en un primer apartado se dará cuenta de las pruebas que dieron pauta al inicio oficioso del procedimiento. Posteriormente, en un segundo apartado se analizarán los medios de prueba aportados por el probable responsable; y por último, se dará cuenta de las pruebas recabadas por la autoridad sustanciadora y lo que se concluye de las mismas.

#### **A) PRUEBAS QUE SE ACOMPAÑAN A LA PETICIÓN RAZONADA DEL SECRETARIO EJECUTIVO.**

El Secretario Ejecutivo sustentó la petición razonada de inicio de procedimiento que formuló a la Comisión el veintisiete de noviembre de dos mil trece, a partir de las siguientes constancias.

- 1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del Acuerdo ACU-52-13 (Visible de foja 01 a 03 del expediente).**

En dicho documento se desprende que el veintisiete de noviembre de dos mil trece, este Consejo General conoció y aprobó los Informes sobre los resultados y conclusiones de la verificación de obligaciones a que se sujetaron las 38 agrupaciones políticas locales en el dos mil trece, entre las que se encuentra el concerniente a la agrupación, Comité de Defensa Popular del Valle de México, tal y como se advierte en el punto de acuerdo PRIMERO.

Asimismo, se advierte que en el punto de acuerdo SEGUNDO, este órgano colegiado ordenó al Secretario Ejecutivo que procediera en términos de lo

1  
212

previsto en el numeral 32 del Procedimiento de Verificación; es decir, que en los casos que resultara pertinente, formulara a la Comisión la petición razonada de inicio de procedimiento sancionador por violaciones a la normativa electoral local.

Al respecto, es oportuno señalar que en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, la copia certificada del Acuerdo ACU-52-13, es una **documental pública** que se desahoga por su propia y especial naturaleza, a la que debe otorgársele **pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna**. Por lo que dicho medio de prueba, por sí mismo, es suficiente para generar convicción en este Consejo General, respecto de la veracidad de lo que en él se consigna; *máxime*, cuando en el expediente no obra constancia alguna que contravenga su autenticidad o la veracidad de lo ahí consignado.

2. **DOCUMENTAL PÚBLICA.** consistente en copia certificada del Informe sobre la verificación del cumplimiento de obligaciones de la Agrupación Política Local denominada “Comité de Defensa Popular del Valle de México” en el año dos mil trece (visible de foja 04 a 17 del expediente).

En dicho documento se advierten los actos que la Dirección efectuó para verificar el cumplimiento de las obligaciones a que se sujetaron las agrupaciones políticas locales en 2013; así como las conclusiones que se desprendieron de la verificación.

Ahora bien, a fin de dar claridad a lo anterior, por cuestión de método, se transcribirá la parte concerniente a la obligación de comunicar la renovación de los órganos de dirección.

*“4.2. Segunda Obligación: Comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.”*

Dir

...

Así, para cumplir con esta obligación la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" debió comunicar oportunamente al Instituto Electoral la integración de sus órganos directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en sus estatutos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 200, fracciones I y VIII de dicho Código.

Para tales efectos, de conformidad con lo establecido en el numeral 21, fracción I del Procedimiento de Verificación, esta Dirección Ejecutiva realizó en la primera quincena de julio de dos mil trece, la verificación en sus archivos respectivos de la integración de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, cuyos resultados se establecieron en un listado general en el que se indicó: 1) las agrupaciones que hasta esa fecha no cuentan con órganos directivos registrados o vigentes; 2) las agrupaciones con órganos directivos vigentes registrados; indicando en ambos casos la fecha de vencimiento de tales órganos.

Derivado del ejercicio anterior, esta Dirección Ejecutiva constató que **la agrupación política denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México"**, desde su registro en el año mil novecientos noventa y nueve, y hasta el último día del mes de julio de dos mil trece, no ha presentado constancias documentales que acrediten la integración y renovación de de sus órganos directivos en los ámbitos local, delegacional y/o distrital.

En el mismo sentido, para verificar esta obligación en el numeral 21, fracción II del Procedimiento de Verificación, se estableció que la Dirección Ejecutiva requerirá mediante oficio a las agrupaciones que no contaran con órganos directivos registrados y/o vigentes, para que dentro de un plazo improrrogable de sesenta días, contados a partir de la notificación correspondiente, comunicaran por escrito al Instituto Electoral la realización de los actos conducentes, de conformidad con sus normas estatutarias para la integración y/o renovación de sus órganos de dirección, incluyendo al órgano ejecutivo general que la represente, así como a los órganos ejecutivos delegacionales o distritales, según sea el caso.

En consecuencia, con fundamento en la disposición normativa referida en el párrafo anterior, la Dirección Ejecutiva mediante el oficio identificado con la clave IEDF/DEAP/370/2013 notificado el tres de julio de dos mil trece, requirió a la agrupación en comento, a fin de que en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la notificación, informara a esta Instancia Ejecutiva los actos que se llevaron a cabo para la renovación e integración de sus órganos de dirección; solicitando en ese mismo acto, remitiera aquellas constancias que se hubieran elaborado para tales efectos.

*Es oportuno señalar que para el caso de la agrupación política local denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" el plazo de sesenta días transcurrió del tres de julio al veinticinco de septiembre de dos mil trece.*

*No obstante lo anterior, desde la fecha de la notificación, a saber, el día tres de julio de dos mil trece, hasta el veinticinco de septiembre del mismo año, fecha en que feneció el plazo para presentar la documentación, la agrupación política "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no había atendido el requerimiento de información señalado en el párrafo que antecede.*

*Así, es dable concluir que la agrupación política denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no atendió el requerimiento de información que le fue realizado por la Dirección Ejecutiva en el marco de la verificación de obligaciones de las agrupaciones políticas locales.*

*En tal virtud, con fundamento en lo establecido en la fracción VII del numeral 21 del Procedimiento de Verificación, esta Instancia Ejecutiva determinó que la agrupación política denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" **no demostró la debida integración o renovación de sus órganos directivos, y como consecuencia no acreditó el cumplimiento de la obligación** consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral la integración de sus órganos directivos.*

*Ello, toda vez que tal y como lo dispone el citado numeral 22, para acreditar la obligación en comento, la Dirección Ejecutiva debió valorar las constancias que fueran exhibidas por las agrupaciones políticas; sin embargo, en el caso que nos ocupa, dicha valoración no se llevó a cabo, dado que como ya ha sido establecido en el presente informe, la agrupación en estudio no atendió el requerimiento formulado por esta Instancia Ejecutiva.*

*En consecuencia, esta Dirección Ejecutiva considera que la agrupación política denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no cumplió con la obligación establecida en el artículo 200, fracción VIII del Código en relación con los numerales 21, fracción VII y 22 del Procedimiento de Verificación.*

...

**5.2. Conclusiones respecto a la obligación consistente en comunicar oportunamente al Instituto Electoral del Distrito Federal, la integración de los órganos directivos y en lo conducente cumplir con lo establecido en sus estatutos.**

*En lo que respecta a la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto Electoral la*

↓  
D12

*integración de los órganos Directivos y, en lo conducente, cumplir con lo establecido en su estatuto, esta autoridad concluye que la agrupación política denominada "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no acreditó el cumplimiento de la misma.*

*Lo anterior se considera así, ya que como ha sido señalado en el apartado correspondiente a la verificación de esta obligación, la agrupación política "Comité de Defensa Popular del Valle de México" no proporcionó a la Dirección Ejecutiva algún documento que acreditara que dicha asociación política hubiera llevado a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos..."*

De lo antes transcrito, se desprende que la Dirección determinó que durante el procedimiento de verificación de obligaciones de dos mil trece, desde su registro, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México no ha presentado constancia alguna que acredite la integración y renovación de sus órganos directivos en los ámbitos local, delegacional y/o distrital.

En ese sentido, en el Informe se da cuenta de que se requirió a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México comunicara por escrito, en un plazo de sesenta días, los actos que de conformidad con sus estatutos se llevaron a cabo para la integración y/o renovación de sus órganos directivos. Cabe mencionar que dicho plazo transcurrió del tres de julio al veinticinco de septiembre de dos mil trece, sin que la citada agrupación atendiera dicho requerimiento. En consecuencia, no demostró la debida integración y renovación de sus órganos de dirección. Por lo que la Dirección concluyó tener por no acreditada la obligación de comunicar oportunamente la integración o renovación de los órganos directivos.

Al respecto, es oportuno señalar que en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, la copia certificada del Informe en comento, es una **documental pública** que se desahoga por su propia y especial naturaleza, a la que debe otorgársele **pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna**. Por lo que dicho medio de prueba, por sí mismo, es suficiente para generar convicción en este Consejo General, respecto de que tanto la Dirección como la Comisión, determinaron que durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013, la

agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México no acreditó la obligación de comunicar oportunamente la integración o renovación de sus órganos de dirección.

**B) PRUEBAS APORTADAS POR EL PROBABLE RESPONSABLE.**

1. **DOCUMENTAL PRIVADA.** Consistente en el ejemplar No. 107 del periódico **El Popular**, presuntamente elaborado por la agrupación **Comité de Defensa Popular del Valle de México**. (visible de foja 45 a 48)

En dicho documento se advierte la existencia de un presunto periódico denominado "El Popular", supuestamente elaborado por la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México durante el mes de septiembre de dos mil diez, del que se desprenden dos convocatorias al "I Congreso Político Delegacionales Extraordinario" y "II Congreso Político Local Extraordinario", ambas correspondientes a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, mismas que presuntamente fueron suscritas por los integrantes de la Comisión Ejecutiva de dicha agrupación.

Siendo oportuno mencionar que dicha **documental privada** se desahoga por su propia y especial naturaleza; y tiene **un alto valor indiciario respecto de la veracidad de la información contenida**, esto es que durante el mes de septiembre de dos mil diez, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México publicó en el periódico "El Popular" dos convocatorias relacionadas con sus Congresos Local y Delegacionales. Ello con fundamento en los artículos 38, fracción II y 40, párrafos primero y tercero del Reglamento.

2. **DOCUMENTALES PRIVADAS.** Consistentes en dos copias simples de las convocatorias al "I Congreso Político Delegacional Extraordinario" y "II Congreso Político Local Extraordinario", ambos de fecha once de diciembre de dos mil trece, supuestamente suscritos por los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la

**agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México.** (visible a fojas 49, 50, 132 a 136)

En dichos documento se advierte la existencia de dos copias simples de las Convocatorias, ambas de fecha once de diciembre de dos mil trece, emitidas por los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México. La primera de ellas, relacionada con el "I Congreso Político Delegacional Extraordinario" a celebrarse del siete al doce de enero de dos mil catorce en las Delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco. Con respecto a la segunda convocatoria, se encuentra relacionada con el "II Congreso Político Local Extraordinario" a celebrarse el catorce de enero de dos mil catorce.

Siendo oportuno mencionar que dicha **documental privada** se desahoga por su propia y especial naturaleza; y al no ser emitida por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, **no tiene pleno valor probatorio, sino un alto valor indiciario respecto de la veracidad de la información contenida**, esto es que durante el mes de enero de dos mil catorce, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México tiene programada la realización de sus Congresos Local y Delegacionales, a efecto de elegir la integración de sus órganos directivos, así como la modificación estatutaria correspondiente. Ello con fundamento en los artículos 38, fracción II y 40, párrafos primero y tercero del Reglamento.

Cabe señalar que obra en autos el original de dichas documentales privadas, ya que mediante escrito de diez de enero de dos mil catorce, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México presentó las convocatorias mencionadas; de igual modo, en dicho escrito la agrupación en comento anexó un ejemplar del periódico "La Prensa" de fecha catorce de diciembre de dos mil trece, del que se desprende la publicación de dichas convocatorias por ese medio.

DPC

3. **DOCUMENTAL PRIVADA.** Consistente en una copia simple que incluye una presunta convocatoria al "I Congreso Político Local Ordinario", de fecha nueve de marzo de dos mil cinco, supuestamente suscrita por los integrantes del Comité Ejecutivo Provisional de la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México. (visible a foja 51)

En dicho documento se advierte la existencia de una copia simple de la que se desprende una convocatoria al "I Congreso Político Local Ordinario" correspondiente a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, de fecha nueve de marzo de dos mil cinco, misma que presuntamente fue suscrita por los integrantes del Comité Ejecutivo Provisional de dicha agrupación.

Siendo oportuno mencionar que dicha **documental privada** se desahoga por su propia y especial naturaleza; y tiene **un alto valor indiciario respecto de la veracidad de la información contenida**. Ello con fundamento en los artículos 38, fracción II y 40, párrafos primero y tercero del Reglamento.

#### **C) PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD SUSTANCIADORA.**

Al respecto, resulta oportuno mencionar que derivado de las facultades investigadoras con que cuenta esta autoridad electoral, y tomando como base los indicios aportados por el Secretario Ejecutivo, se realizaron diversas diligencias de investigación a fin de allegarse de aquellos elementos de convicción que le permitieran establecer la veracidad o falsedad de lo enunciado en la petición razonada; y por ende, estar en aptitud de determinar si se contravino o no la normativa electoral; cuyos resultados se muestran a continuación:

- 1) Se integró al expediente en que se actúa, el oficio IEDF-DEAP/703/2013 (foja 54), mediante el cual el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas informó que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México obtuvo su registro ante este Instituto Electoral el veinticinco de octubre del año

mil novecientos noventa y nueve; así como que desde la verificación de obligaciones realizada en 2010, hasta el dos mil trece, dicha asociación no ha realizado ninguna modificación estatutaria vinculada con el procedimiento de renovación de sus órganos directivos.

Asimismo, en dicho oficio se informa que los órganos de dirección de la citada agrupación son el órgano local (Comisión Ejecutiva) y el órgano delegacional (Comités Delegaciones); igualmente, se refiere el procedimiento que, de acuerdo a sus estatutos, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México debe realizar a fin de llevar a cabo la renovación e integración de sus órganos directivos.

Cabe mencionar que anexo al oficio en comento, se advierte copia certificada de la solicitud de registro como agrupación política local presentada ante esta autoridad por la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México el veintinueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, de la que se desprende la integración del órgano directivo de dicha agrupación.

Al respecto, es oportuno señalar que en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, el oficio IEDF-DEAP/703/2013, es una **documental pública** que se desahoga por su propia y especial naturaleza, a la que debe otorgársele **pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna**. Por lo que dicho medio de prueba, por sí mismo, es suficiente para generar convicción en este Consejo General, respecto de la veracidad de lo que en él se consigna; *máxime*, cuando en el expediente no obra constancia alguna que contravenga su autenticidad o la veracidad de lo ahí consignado.

Ahora bien, en lo que respecta al anexo del oficio en comento, en términos de lo previsto en artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, es una prueba **documental pública** que se desahoga por su propia y especial naturaleza, a la que debe otorgársele **pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna**.

2) Se integró al expediente en que se actúa, el oficio IEDF/DEAP/046/14 (foja 183), mediante el cual el Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas informó que al dieciséis de enero de dos mil catorce, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México no ha emitido comunicado alguno del que se desprenda que realizó alguna acción de manera posterior al Informe sobre el cumplimiento de obligaciones revisadas durante dos mil trece, a efecto de subsanar el incumplimiento de la obligación que por esta vía se resuelve.

Al respecto, es oportuno señalar que en términos de lo previsto en los artículos 38, fracción I, inciso a) y 40, párrafo segundo del Reglamento, el oficio IEDF/DEAP/046/14, es una **documental pública** que se desahoga por su propia y especial naturaleza, a la que debe otorgársele **pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna**. Por lo que dicho medio de prueba, por sí mismo, es suficiente para generar convicción en este Consejo General, respecto de la veracidad de lo que en él se consigna; *máxime*, cuando en el expediente no obra constancia alguna que contravenga su autenticidad o la veracidad de lo ahí consignado.

Así, una vez adminiculados los medios de prueba que obran en el expediente en que se actúa, esta autoridad electoral tiene por acreditado lo siguiente:

- Que durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013, la Dirección concluyó que hasta el último día del mes de julio de ese año, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México no tenía vigente el órgano directivo local, ni los órganos delegacionales.
- Que el día tres de julio de dos mil trece, personal habilitado de la Dirección se presentó en el domicilio registrado de la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, a fin de notificarle el oficio IEDF/DEAP/370/2013, mediante el cual se requirió a dicha asociación política remitiera las constancias que acreditaran los actos realizados para integrar sus órganos de dirección. Sin embargo, la agrupación no atendió al requerimiento de información mencionado.

- Que durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013, la Dirección concluyó que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México no cumplió con su obligación de comunicar oportunamente la integración de sus órganos directivos, ya que no atendió el requerimiento que le fue formulado.
- Que mediante escrito de fecha once de diciembre de dos mil trece, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México señaló que en fecha once de diciembre de dos mil trece se convocó al Congreso Político Local Extraordinario, a efecto de elegir la integración de los órganos directivos de dicha agrupación, por lo que solicitaron a esta autoridad que se les concediera el tiempo necesario para llevar a cabo dicho proceso, precisando que tienen programada la realización del congreso correspondiente el catorce de enero de dos mil catorce.
- Que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México ofreció como medio de prueba dos Convocatorias, ambas de fecha once de diciembre de dos mil trece, relacionadas con el "I Congreso Político Delegacional Extraordinario" a celebrarse del siete al doce de enero de dos mil catorce en las Delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco; así como con el "II Congreso Político Local Extraordinario" a celebrarse el catorce de enero de dos mil catorce.

**V. ESTUDIO DE FONDO.** Una vez analizadas las constancias que dieron origen a este procedimiento; así como los resultados que arrojó la investigación, este Consejo General llega a la convicción de que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México **es administrativamente responsable** de incumplir con su obligación de comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos, en un plazo máximo de tres meses una vez que ésta hubiera ocurrido, vulnerando lo previsto en el artículo 200, fracción VIII del Código.

Ahora bien, a fin de estar en condiciones de establecer la premisa normativa aplicable al caso concreto, resulta oportuno transcribir la parte atinente de la norma que se considera se ha contravenido:

*"Artículo 200. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:*

...

*VIII. Comunicar oportunamente al Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos..."*

De lo antes transcrito, se desprende que con el objetivo de verificar el regular funcionamiento y adecuado cumplimiento de los fines de las agrupaciones políticas locales, el Código les ha impuesto la obligación de mantener informada a esta autoridad electoral, la debida integración de sus órganos de dirección.

Ello es así, ya que dicha disposición pretende garantizar a los afiliados de las agrupaciones políticas locales que cuenten con una representación democráticamente electa, y que se continúe con la ejecución de las actividades y cometidos para los cuales se constituyó.

En ese sentido, es importante señalar que para la integración o renovación de los órganos directivos de las agrupaciones políticas locales, es necesario que además de observar lo previsto en sus estatutos y en el Código, se actúe de conformidad con los principios del Estado democrático; entre los que se encuentra el derecho al sufragio en su faceta pasiva y activa, así como el de rendición de cuentas.

En otras palabras, los mecanismos de renovación e integración de órganos directivos deben garantizar la posibilidad real y efectiva de que los militantes de la agrupación política puedan elegir y ser electos como titulares de sus órganos de dirección, y de que éstos puedan ser removidos en los casos que así lo amerite.

En el caso particular, es preciso señalar que para tener por acreditada la obligación de comunicar oportunamente la integración de órganos directivos, es

necesario revisar los resultados del último procedimiento de verificación que se realizó; en este caso, el concerniente al año 2013.

En esa tesitura, ha quedado establecido en el apartado de valoración de pruebas, que durante el procedimiento de verificación de 2013 se concluyó que desde su registro, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México no ha presentado constancia alguna que acredite la integración y renovación de sus órganos directivos en los ámbitos local y delegacional.

En ese sentido, ha quedado acreditado en esta resolución, que durante el proceso de verificación de obligaciones de 2013, se requirió a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México remitiera las constancias que acreditaran los actos que dicha asociación hubiera realizado para la integración y renovación de sus órganos de dirección.

Sin embargo, tal y como se señala en el Informe, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México no atendió el requerimiento que le fue formulado y, en consecuencia, no acreditó que hubiera llevado a cabo la elección de sus órganos de dirección.

Cabe mencionar que ya ha sido establecido, que el Informe, constituye una prueba documental pública, con pleno valor probatorio de lo que en ella se consigna. Por lo que en el caso particular, es elemento suficiente para generar convicción en esta autoridad, de que durante la referida verificación de obligaciones, los órganos de dirección de la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México no habían sido electos; así como que dicha asociación política no aportó ningún medio de prueba que permitiera establecer, cuando menos, en grado indiciario, que se hubiera realizado algún acto tendente a subsanar dicha omisión.

Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que durante la sustanciación de este procedimiento, se emplazó a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con la irregularidad en comento.

↓  
2013

En respuesta al emplazamiento que le formuló esta autoridad electoral, la **agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México** señaló que en fecha **once de diciembre de dos mil trece se convocó al Congreso Político Local Extraordinario**, a efecto de elegir la integración de los órganos directivos de dicha agrupación, por lo que solicitó a esta autoridad que se le concediera el tiempo necesario para llevar a cabo dicho proceso, precisando que tienen programada la realización del congreso correspondiente el catorce de enero de dos mil catorce.

Al respecto, resulta oportuno mencionar que dicha agrupación ofreció como medio de prueba dos Convocatorias, ambas de fecha once de diciembre de dos mil trece, relacionadas con el "I Congreso Político Delegacional Extraordinario" a celebrarse del siete al doce de enero de dos mil catorce en las Delegaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco; así como con el "II Congreso Político Local Extraordinario" a celebrarse el catorce de enero de dos mil catorce.

De igual modo, obra en autos el escrito de diez de enero de dos mil catorce, mediante el cual la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México presentó las convocatorias mencionadas; de igual modo, en dicho escrito la agrupación en comento anexó un ejemplar del periódico "La Prensa" de fecha catorce de diciembre de dos mil trece, del que se desprende la publicación de dichas convocatorias en ese medio de comunicación.

Por lo anterior, este Consejo General considera que dichos documentos generan indicios respecto de que la agrupación política local Comité de Defensa Popular del Valle de México se encuentra llevando a cabo los actos necesarios para integrar los órganos de dirección que no se encuentran vigentes; sin embargo, en el expediente de mérito no se tiene constancia alguna que acredite que dicha asociación hubiera llevado a cabo la integración de sus órganos de dirección local y delegacionales.

↓  
Dnz

Así, al concatenar el resultado de la verificación de obligaciones de 2013 con la información recabada en la sustanciación del presente procedimiento sancionador, este Consejo General considera que no existe documento alguno que pudiera acreditar que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México ha integrado su órgano local y los delegacionales.

Bajo esa lógica, a este Consejo General le es posible concluir que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México incumplió con su obligación de comunicar a este Instituto Electoral, la integración de su órgano local y los órganos delegacionales y, en consecuencia, dicha asociación política vulneró lo previsto en el artículo 200, fracción VIII del Código.

**VI. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.** Una vez que se ha acreditado el incumplimiento de la norma en materia electoral, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 374 del Código, se procede a graduar la responsabilidad en que incurrió la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, acorde con lo establecido en el Considerando que antecede.

a) En cuanto al **tipo de infracción**, esta autoridad estima que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México incurrió en una omisión, ya que no cumplió con su obligación de comunicar oportunamente la integración y renovación de su órgano directivo local y los órganos delegacionales.

b) En cuanto a los **artículos o disposiciones normativas transgredidas**, esta autoridad estima que se encuentra probada la trasgresión de manera directa, al artículo 200, fracción VIII, en relación con su similar 377, fracción I del Código.

Dichos preceptos normativos, por una parte constriñen a las agrupaciones políticas a cumplir con su obligación comunicar la integración y renovación de su órganos de dirección; y por otra, establecen que dichas asociaciones políticas deben observar las disposiciones del Código; lo cual, en el caso, se tiene por acreditado que no fue cumplido.

1  
D22

c) En cuanto a la **naturaleza de la infracción**, cabe apuntar que la conducta en que incurrió la agrupación política infractora debe considerarse como una falta **SUSTANTIVA**, ya que al no acreditar que cuenta con órganos directivos, se afectan directamente los valores jurídicos tutelados por la norma electoral; así como los principios del Estado democrático; en este caso particular, los concernientes a la posibilidad de que sus militantes elijan y sean electos en los órganos de dirección de la agrupación en el ámbito local y delegacional.

d) En cuanto a las **circunstancias de modo en la comisión de la falta**, debe decirse que tomando en consideración la postura asumida por la asociación infractora, es dable concluir que se trata de una única conducta de omisión que produjo un resultado contrario al previsto por las expectativas normativo-electorales descritas en los apartados correspondientes.

De manera concordante, tomando en cuenta la finalidad de la conducta omisiva, del sumario no se advierte que exista un patrón de conductas tendentes a reiterar la irregularidad acreditada en esta vía.

e) En cuanto a las **circunstancias de tiempo en la comisión de la falta**, tal y como se determinó en el Considerando respectivo, la agrupación responsable no acreditó tener órganos directivos vigentes, durante el procedimiento de verificación de obligaciones de 2013.

f) En cuanto a las **circunstancias de lugar en la comisión de la falta**, debe decirse que las mismas se realizaron en el territorio del Distrito Federal.

g) Por lo que hace al **conocimiento y/o facilidad que tuvo el infractor para cumplir con lo prescrito por las normas trasgredidas**, debe acotarse que en términos de lo antes razonado, esta autoridad estima que la agrupación política señalada como responsable tuvo pleno conocimiento de las obligaciones que le imponen las normas trasgredidas, ya que por una parte, la vigencia de dichas obligaciones comenzaron con la entrada en vigor del Código; es decir, el veintiuno de diciembre de dos mil diez.

↓  
Dmz

Sirve como apoyo a lo anterior, el antecedente que obra en los archivos de este Instituto Electoral, respecto de que en el año 2010 la citada agrupación fue sujeta a un procedimiento de verificación de obligaciones en el que se dictaminó que no acreditó el cumplimiento de la obligación que hoy se analiza, dando lugar al inicio de un procedimiento sancionador en el que mediante la aprobación de la Resolución RS-90-11, este Consejo General sancionó a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, por el incumplimiento de su obligación de comunicar la integración y/o renovación de sus órganos de dirección.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que la agrupación infractora conocía plenamente el sentido y contenido de la obligación incumplida, toda vez que dicha obligación ha sido contemplada por la normativa electoral local en: 1) el Código Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta del Distrito Federal el 5 de enero de 1999; 2) el Código Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta el 10 de enero de 2008; y, 3) el Código de Instituciones y Procedimientos Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta el 20 de diciembre de 2010.

En tal virtud, es factible concluir que la agrupación tuvo conocimiento de la obligación, desde el momento en que obtuvo su registro como agrupación política local ante este Instituto Electoral; a saber: el 25 de octubre de 1999.

Del mismo modo, es oportuno señalar que el veintitrés de mayo de dos mil trece, este Consejo General aprobó el Procedimiento de Verificación, mismo que fue notificado a la agrupación en comento el veintinueve de mayo de dos mil trece, y que se encuentra visible en el sitio web de este Instituto Electoral; a saber: [www.iedf.org.mx](http://www.iedf.org.mx).

Por otra parte, tal y como ha quedado establecido en este fallo, durante el procedimiento de verificación de 2013, la Dirección requirió a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, informara los actos que de conformidad con sus estatutos, había realizado para la integración y/o

renovación de sus órganos directivos en el ámbito local y delegacional; sin embargo, no se recibió respuesta alguna por parte de dicha asociación.

Con base en lo anterior, es factible concluir que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México tuvo pleno conocimiento de la obligación que debía cumplir; además, de la forma en que podía acreditar dicho cumplimiento, siendo omisa al respecto.

h) Por cuanto hace a la **intencionalidad del infractor**, este Consejo General considera que de conformidad con las constancias que obran en el expediente; así como en lo razonado a lo largo de este fallo, la conducta omisiva en que incurrió la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México es de carácter **DOLOSO**.

Al respecto, es oportuno mencionar que de acuerdo con lo razonado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-25/2012, para tener por acreditado el dolo en la conducta es necesario tener en cuenta dos elementos: el elemento intelectual del sujeto y el elemento volitivo.

Ahora bien, **el elemento intelectual** estriba en el conocimiento ordinario de que el actuar en determinado sentido infringe normas jurídicas; en otras palabras, este elemento del dolo reside en que el sujeto infractor, al momento de cometer la conducta delictiva, conocía la norma jurídica que lo obligaba a actuar de determinada manera, es decir, estaba al tanto de los elementos objetivos y subjetivos del tipo normativo.

Por su parte, **el elemento volitivo** entraña la voluntad del sujeto de dirigir su acción a la persecución de cierto fin; esto es, que el responsable realizó voluntariamente la conducta que se considera infringe la norma, consciente de que su actuar u omisión puede llegar a producir el resultado típico previsto en la norma.

↓  
Dn2

Así, para que este Consejo General esté en condiciones de considerar una conducta como dolosa, deben quedar plenamente acreditados los elementos del dolo. Bajo esa lógica, resulta obvia la necesidad de que en el expediente obren los medios probatorios idóneos para acreditar directamente tanto el elemento intelectual y el volitivo.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que, con base en los hechos que han sido acreditados se pueda inferir un hecho desconocido; en este caso, a partir de las constancias que obran en el expediente, se puede llegar a deducir tanto el elemento intelectual como el volitivo del sujeto infractor. Ello sucede cuando a partir de los indicios arrojados por los medios de prueba, se puede realizar una comprobación inferencial que atendiendo una relación de antecedente a consecuente, permita inducir lógicamente a tener por ciertos hechos diversos a los probados directamente con las constancias del sumario.

Lo anterior encuentra sustento en lo razonado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada derivada de la contradicción de tesis 68/2005-PS, misma que se reproduce a continuación:

**DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL.**

*El dolo directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente o prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, según las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la conclusión de la que se busca certeza.*

022

*Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias ya probados.*

*Contradicción de tesis 68/2005-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.*

*Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió.*

Con base en lo anterior, para que esta autoridad electoral esté en condiciones de determinar si se acredita el **elemento intelectual** del dolo, debe valorar si el infractor tenía pleno conocimiento de la obligación que debía de cumplir; así como de la forma en que debía de hacerlo. En otras palabras, debe demostrarse que la agrupación responsable, previo a la comisión de la infracción, conocía plenamente los elementos del tipo normativo de la disposición legal que se ha contravenido.

En ese contexto, ha quedado plenamente acreditado en el expediente, que la asociación Comité de Defensa Popular del Valle de México obtuvo su registro como agrupación política local el 25 de octubre de 1999, por lo que desde esa fecha adquirió el carácter de sujeto obligado a cumplir las disposiciones contempladas en la normativa electoral que han estado vigentes durante su existencia; esto es, los códigos comiciales locales publicados en la Gaceta del Distrito Federal los días 5 de enero de 1999, 10 de enero de 2008 y 20 de diciembre de 2010.

Aunado a lo anterior, resulta preciso señalar que en términos de lo previsto en el artículo 200, fracción I del Código, la agrupación infractora se encuentra obligada a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y los principios del Estado democrático. Por lo que no se puede aducir un desconocimiento de la norma electoral local, menos aún, tratándose de una asociación política que debe regir su actuar por dicha normativa.

En consecuencia, es factible concluir que la agrupación infractora tenía pleno conocimiento de que debía cumplir con su obligación de comunicar

oportunamente a este Instituto Electoral, la integración de sus órganos directivos, misma que se encuentra prevista en el artículo 200, fracción VIII del Código.

Además, en el caso particular, ha quedado comprobado que el veintitrés de mayo de dos mil trece, este Consejo General aprobó el Procedimiento de Verificación, mismo que se notificó a la agrupación en comento el día veintinueve de mayo de dos mil trece. Por lo que el infractor tenía pleno conocimiento de la obligación que debía cumplir; así como la forma y los medios que necesitaba para ello.

En tal virtud, es posible concluir que la agrupación infractora tenía pleno conocimiento de que el no atender lo señalado en el requerimiento formulado por la Dirección, traería como consecuencia el que dicha asociación política no acreditara la obligación de comunicar la integración y/o renovación de sus órganos de dirección; y por ende, que incumpliría con la obligación impuesta por la norma electoral local.

En razón de lo hasta aquí expuesto, es factible considerar que se tienen por colmados los requisitos para determinar que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México tenía pleno conocimiento de los elementos del tipo de la norma que infringió; y por ende, **a este Consejo General le es posible tener por acreditado el elemento intelectual del dolo.**

Por otra parte, en lo que refiere al **elemento volitivo del dolo**, debe tenerse en cuenta que de las constancias que obran en el expediente se advierte que en el modo de obrar del infractor existió la intencionalidad de incumplir con la norma. Es decir, que **del sumario se desprende que la agrupación infractora voluntariamente decidió no realizar los actos necesarios para cumplir con su obligación de comunicar la integración y renovación de sus órganos de dirección.**

Lo anterior se considera así, ya que tal y como consta en el apartado de valoración de pruebas, el tres de julio de dos mil trece, personal de la Dirección

↓  
Dnr

notificó personalmente a la infractora, el oficio de requerimiento IEDF/DEAP/370/2013, sin embargo, quedó constatado que durante la verificación de obligaciones de 2013, no se recibió respuesta alguna al requerimiento de mérito.

Aunado a lo anterior, es oportuno señalar que durante la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, la infractora no aportó elemento alguno con el que esta autoridad acreditara el cumplimiento de la obligación en comento.

Al respecto, cabe mencionar que al momento de ofrecer respuesta al emplazamiento que le fue formulado, la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México remite diversa documentación que permite a esta autoridad suponer que dicha asociación política se encuentra llevando a cabo actos a efecto de subsanar su omisión de manera posterior al inicio del procedimiento de mérito.

De igual modo, obra en autos el escrito de diez de enero de dos mil catorce, mediante el cual la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México presentó dos Convocatorias, ambas de fecha once de diciembre de dos mil trece, relacionadas con el "I Congreso Político Delegacional Extraordinario" a celebrarse del siete al doce de enero de dos mil, así como con el "II Congreso Político Local Extraordinario" a celebrarse el catorce de enero de dos mil catorce; de igual modo, en dicho escrito la agrupación en comento anexó un ejemplar del periódico "La Prensa" de fecha catorce de diciembre de dos mil trece, del que se desprende la publicación de dichas convocatorias por ese medio de comunicación.

Sin embargo, este Consejo General considera que lo anterior sólo genera indicios respecto de que la agrupación política local Comité de Defensa Popular del Valle de México se encuentra realizando los actos necesarios para integrar sus órganos que no se encuentran vigentes, siendo que en el expediente de mérito no se tiene constancia alguna que acredite que dicha asociación hubiera

llevado a cabo la integración de sus órganos directivos en el ámbito local y delegacional.

En consecuencia de lo hasta aquí expuesto, a este Consejo General le es posible inferir que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México omitió voluntariamente cumplir con su obligación de comunicar la integración y renovación de sus órganos directivos, **ya que no mostró intención alguna de cooperar con este Instituto Electoral durante la verificación de obligaciones de 2013, ni aportó elementos probatorios que demostraran el cumplimiento de la obligación.**

En tal virtud, **a este Consejo General le es posible determinar que se tiene por colmado el requisito del elemento volitivo del dolo.** Por lo que en el caso particular, es posible concluir que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México omitió dolosamente cumplir con su obligación de comunicar la integración y renovación de sus órganos directivos.

i) Por cuanto hace al **beneficio económico y/o electoral obtenido por el infractor**, debe decirse que tomando en consideración que el efecto de la falta en que incurrió el infractor, se tradujo en el incumplimiento a una obligación de hacer, debe estimarse que no existe un beneficio económico.

j) Del igual modo, tocante a la **perniciocidad de la falta**, debe estimarse probada en el presente caso, ya que al no cumplir con su obligación de comunicar la integración y renovación de sus órganos directivos en el ámbito local y delegacional, se ponen en peligro diversas disposiciones del Código; asimismo se cuestionan los fines para los que se constituyen las agrupaciones políticas en el Distrito Federal.

Asimismo, debe considerarse que el incumplimiento de la obligación de renovar e integrar sus órganos directivos local y delegacionales, puede llegar a ser trascendental para la consecución de los fines de la agrupación política, ya que al no estar vigentes los órganos de representación en el ámbito local y delegacional, se pone en peligro el adecuado funcionamiento y ejecución de los

programas de la asociación política; de igual modo, se deja en incertidumbre a los afiliados, respecto de que cuenten con representantes elegidos democráticamente en el ámbito local y delegacional, sin llegar a afectar la operatividad de la asociación política.

Una vez sentadas las anteriores consideraciones, y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción, esta autoridad procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

**1) La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.** La infracción cometida por la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México debe estimarse como **GRAVE**, ello atendiendo a los elementos objetivos y sustantivos que anteriormente fueron precisados en el presente fallo.

A fin de precisar dicho punto, sirve como criterio orientador lo razonado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada derivada de la contradicción de tesis 68/2005-PS, cuyo rubro se transcribe a continuación:

*"DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL."*

Al respecto, se concluye que queda al arbitrio de esta autoridad sustanciadora determinar la gravedad de la falta cometida por la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, tomando en consideración los elementos antes descritos.

Ahora bien, entre los parámetros que debe utilizar la autoridad electoral para estimar la afectación a los bienes jurídicos protegidos por la norma, está el de analizar el comportamiento posterior del infractor, en relación con el ilícito administrativo cometido.

En relación con lo anterior, tal y como se advierte en el apartado de pruebas, la agrupación política aportó al procedimiento administrativo sancionador, diversos elementos probatorios de los que se desprende que ésta se encuentra

↓  
D12

realizando los actos correspondientes para dar cumplimiento a su obligación, sin que dicho cumplimiento se haya demostrado ante la autoridad electoral.

Además, debe tenerse en cuenta que ha quedado establecido que la falta es de carácter **SUSTANCIAL**, ya que pone en peligro los valores jurídicamente tutelados por la norma, a la vez que atenta contra los principios del Estado democrático.

Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que se configuró el **dolo** en la conducta omisiva de la agrupación infractora, ya que la conducta se desprendió de una omisión voluntaria de la responsable.

**2) Reincidencia.** Esta autoridad considerará **reincidente** al infractor que habiendo sido responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones que se encuentran previstas en el Código incurra nuevamente en la misma conducta infractora; para ello sirve también de apoyo lo razonado en la jurisprudencia 41/2010 de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber:

**"REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.** De conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 355, párrafo 5, inciso e), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 26.1 del Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son: 1. El ejercicio o período en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción; 2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y 3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme."

En ese sentido, en los archivos de este Instituto Electoral se tiene constancia de que en el año 2011, se sancionó a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, por el incumplimiento a la obligación de comunicar la integración y renovación de sus órganos de dirección, a través de la Resolución RS-90-11, que no fue impugnada ante algún órgano jurisdiccional y, en consecuencia, tiene el carácter de cosa juzgada.

me

En virtud de lo anterior, este Consejo General concluye que **se tiene por acreditada la reincidencia** en la comisión de la conducta que por esta vía se sanciona, por parte de la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México.

En ese contexto, la infracción generada debe ser objeto de una sanción tomando en cuenta la importancia del bien jurídico tutelado por el ordenamiento de la materia, las circunstancias particulares que se presentaron en el caso concreto (modo, tiempo y lugar) que han sido analizadas a lo largo de estos párrafos, así como la calidad del infractor, sin que ello implique que ésta incumpla con una de sus finalidades, como lo es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida.

Lo anterior, es congruente con la *ratio essendi* sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con el rubro SUP-RAP-24/2010, que a continuación se transcribe:

*"...el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado, a través del Consejo General del Instituto Federal Electoral, que deriva de la acreditación de una infracción, no es irrestricto o discrecional, sino que se encuentra condicionado a la ponderación de determinadas condiciones objetivas y subjetivas atinentes a la conducta y al infractor, que le permitan individualizar la sanción a imponer al transgresor de la norma electoral, bajo parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad, de tal manera que, dicha consecuencia jurídica no resulte desproporcionada ni gravosa para aquél, pero sí eficaz para lograr el objetivo que persigue la facultad punitiva, a saber: la ejemplaridad de la pena disuadir a dicho responsable la intención de volver a cometer la infracción.*

*El propósito fundamental que se persigue con dicho ejercicio ponderativo, consiste en que la sanción que determine aplicar la autoridad administrativa electoral guarde correspondencia lo más cercano posible, en un grado razonable, con las circunstancias que rodean la falta o infracción y las condiciones del sujeto responsable."*

[Énfasis añadido].

Así, en el presente caso, la sanción que se puede imponer a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, por infringir lo dispuesto por el artículo 200, fracción VIII, en relación con su similar 377, fracción I del Código, es una de las previstas en el artículo 379, fracción II, inciso b) del Código, que establecen:

*"Artículo 379. Las infracciones a que se refiere el artículo 377 de este ordenamiento serán sancionadas valorando los elementos objetivos del caso y se sancionarán conforme a lo siguiente:*

*II. Respecto de las Agrupaciones Políticas:*

*b) Por causas de las fracciones I, II y IX del artículo 377, hasta con la pérdida del registro;"*

De lo antes transcrito, se advierte que el legislador local dejó al arbitrio de este órgano máximo de dirección el razonar cual sería la sanción óptima a imponer, atendiendo a las circunstancias objetivas y subjetivas del caso particular, al no establecer lo que debía entenderse como el mínimo de la sanción, ni el término medio entre éste y el máximo.

Al respecto, sirve como criterio orientador la tesis histórica sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación:

**"ARBITRIO PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES. LO TIENE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.—***De una interpretación sistemática y funcional del artículo 270, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 269 del propio ordenamiento, se llega a la conclusión de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la atribución de tomar en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, al momento de imponer la sanción que corresponda, por la comisión de dicha falta. Con fundamento en los anteriores preceptos, es posible concluir que, dentro de los límites legales, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debe estudiar invariablemente las circunstancias particulares y la gravedad de la falta, al momento de imponer una sanción. En efecto, la normatividad invocada permite concluir que el legislador ordinario no se orientó por determinar en la ley, pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de la potestad sancionadora conferida al órgano administrativo correspondiente; por el contrario, el mencionado legislador estableció en la ley las condiciones genéricas para el ejercicio de la potestad de mérito y remitió el resto de dichas condiciones a la estimación del consejo general, sobre todo por lo que hace a la consideración de las circunstancias del caso y la gravedad de la falta.*

*Tercera Época:*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/2000.— Jesús López Constantino y Miguel Ángel Zúñiga Gómez.—30 de enero de 2001.—Unanimidad en el criterio.*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-026/2002.—Partido Verde Ecologista de México.—28 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-021/2001.—Partido de la Revolución Democrática.—11 de diciembre de 2002.—Unanimidad en el criterio.*

*Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, página 7, Sala Superior, tesis S3ELJ 09/2003.”*

Ahora bien, es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades ser una medida ejemplar tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten excesivas, desproporcionadas o irracionales, o por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Para el desarrollo de este punto, esta autoridad electoral considera indispensable aludir al contenido de la Tesis XXVIII/2003 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente:

**“SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.** En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

**Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-043/2002. Partido Alianza Social. 27 de febrero de 2003. Unanimidad en el criterio. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Andrés Carlos Vázquez Murillo.*

**Nota:** El contenido del artículo 269 de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en esta tesis corresponde con el artículo 354, párrafo 1, incisos a) y b), del Código vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación.

*La Sala Superior en sesión celebrada el cinco de agosto de dos mil tres, aprobó por unanimidad de seis de votos la tesis que antecede.*

1  
Dnr

*Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 7, Año 2004, página 57."*

En ese contexto, atendiendo a la finalidad ejemplar de la sanción, las particularidades del caso que nos ocupa y la importancia del bien jurídicamente tutelado que fue vulnerado, esta autoridad electoral considera que con el simple hecho de haberse acreditado la infracción, es suficiente para imponer una sanción a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México. Sin embargo, en el caso particular existen circunstancias que deben ser analizadas, por lo que atendiendo a la existencia de agravantes o atenuantes se incrementará o disminuirá la sanción a imponer.

En concordancia con lo anterior, este Consejo General considera que:

- La conducta de **omisión** imputada a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México es una falta **SUSTANCIAL** que afectó directamente el valor jurídico tutelado por la norma y transgredió los principios del Estado democrático, además de que coloca en situación de riesgo los fines para los que se constituyen las agrupaciones políticas en el Distrito Federal.
- Atendiendo a la naturaleza del **bien jurídico tutelado** que fue puesto en peligro y a las circunstancias objetivas y subjetivas en que se cometió la infracción, esta autoridad calificó como **GRAVE** la falta.

Sin embargo, no pasan desapercibidos para esta autoridad los elementos de prueba que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México ofreció durante la sustanciación del procedimiento de mérito; lo que permite concluir que dicha agrupación se encuentra llevando a cabo los actos necesarios a efecto de subsanar su omisión.

No obstante lo anterior, debe considerarse que el incumplimiento de la obligación de renovar e integrar su órgano directivo local y delegacionales, puede llegar a ser trascendental para la consecución de los fines de la agrupación política, ya que al no estar vigentes los

órganos de representación en el ámbito local y delegacional, se pone en peligro el adecuado funcionamiento y ejecución de los programas de la asociación política; de igual modo, se deja en incertidumbre a los afiliados, respecto de que cuenten con representantes elegidos democráticamente, sin llegar a afectar la operatividad de la asociación política.

- Aunado a lo anterior, se consideró que la falta fue **DOLOSA**, ya que se acreditó que la agrupación infractora no realizó ningún acto por el que diera cumplimiento a la obligación en comento, lo cual debe ser considerado circunstancia agravante.
- Por último, se acreditó la existencia **reincidencia** en la comisión del tipo de conducta que por esta vía se sanciona. Hecho que por sí mismo, implica que se agrave la situación del infractor.

Conforme a la valoración conjunta de los elementos referidos y a fin de que la sanción impuesta sea proporcional con el daño causado y la puesta en riesgo del valor jurídico tutelado por la norma infringida; así como para que resulte inhibitoria para que en un futuro no se comenten este tipo de conductas, es que este Consejo General llega a la convicción de que la sanción que debe imponerse a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, debe ser una amonestación pública.

Asimismo, resulta oportuno mencionar que no se considera viable imponer una **multa** como sanción a la agrupación en comento en razón de que no se desprende un beneficio económico, es decir que no existe ningún monto económico involucrado en la conducta que se sanciona; aunado a ello se debe considerar que no es posible determinar la capacidad económica del sujeto infractor, en atención a que las agrupaciones políticas no cuentan con financiamiento público, que se pueda utilizar como parámetro para establecer una sanción.

↓  
D12

Ello es así, pues entre las finalidades de la graduación de la sanción, se encuentra el disuadir al infractor de la conducta antijurídica, por lo que para evitar el riesgo de que la sanción a imponer no tenga el alcance para satisfacer la intensidad que se pretende o que pueda ser excesiva para la capacidad del sujeto infractor. En consecuencia, se impone a la agrupación política Comité de Defensa Popular del Valle de México la sanción consistente en una **AMONESTACIÓN PÚBLICA**.

Aunado a lo anterior, este Consejo General considera necesario otorgar a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se notifique este fallo, para que realice los actos necesarios para la integración de sus órganos directivos, remitiendo a este Instituto Electoral las constancias que lo acrediten.

Ello, toda vez que del análisis de las constancias que obran en el expediente se desprende que al contestar el emplazamiento que le fue formulado, dicha agrupación solicitó a esta autoridad sustanciadora el plazo suficiente para subsanar sus omisiones, informando que el catorce de enero de dos mil catorce llevaría a cabo la celebración del Congreso correspondiente.

Adicionalmente ofreció como medios probatorios dos convocatorias a los Congresos Local y Delegacionales, a efecto de integrar sus órganos directivos durante el mes de enero del año en curso.

Por lo anterior, esta instancia colegiada considera que el plazo otorgado a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México para que realice los actos necesarios para la integración de sus órganos directivos, es el necesario para que de cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad.

En este sentido, se **APERCIBE** a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México que, en el caso de no realizar la integración de sus órganos directivos, en el plazo concedido, el Secretario Ejecutivo procederá de conformidad con lo previsto en los artículos 203 y 204 del Código.

Para tal efecto se instruye a la Dirección, para que dentro del plazo concedido a la responsable, auxilie al Secretario Ejecutivo con la valoración de las constancias que la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México remita para acreditar lo ordenado en esta resolución.

Por lo antes expuesto y fundado se:

**RESUELVE:**

**PRIMERO.** La agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México **ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE** por no comunicar oportunamente la integración de sus órganos directivos, en términos de lo razonado en los Considerandos **V** y **VI** de la presente Resolución.

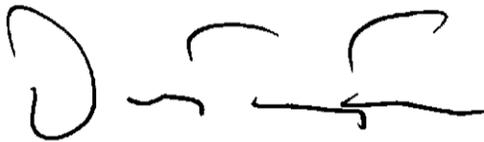
**SEGUNDO.** Se impone a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México una **AMONESTACIÓN PÚBLICA**, por el incumplimiento de la obligación de acreditar ante esta autoridad que cuenta con el órgano directivo local y los órganos delegacionales, en términos de lo señalado en los Considerandos **V** y **VI** de esta resolución.

**TERCERO.** Se concede a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que se notifique la presente resolución, para que lleve a cabo los actos necesarios a fin de acreditar el cumplimiento de la obligación consistente en comunicar oportunamente a este Instituto Electoral la integración de su órgano directivo local y los órganos delegacionales, **APERCIBIDA** que en caso de no realizar la integración de sus órganos directivos en el plazo previsto, el Secretario Ejecutivo presentará ante la Comisión de Asociaciones Políticas, la petición razonada de inicio del procedimiento de pérdida de registro, por la posible actualización de los supuestos previstos en el artículo 203 del Código.

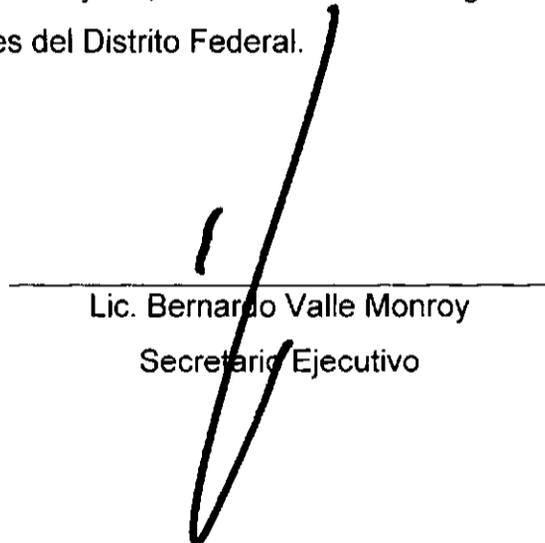
**CUARTO. NOTIFÍQUESE** personalmente a la agrupación Comité de Defensa Popular del Valle de México, acompañándole copia simple de la presente resolución, dentro de los siete días hábiles siguientes a su aprobación.

**QUINTO. PUBLÍQUESE** la presente resolución en los estrados ubicados en las oficinas centrales de este Instituto Electoral; así como en el sitio de Internet: [www.iedf.org.mx](http://www.iedf.org.mx), y en su oportunidad, **ARCHÍVESE** el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos las Consejeras y los Consejeros Electorales del Instituto Electoral, en sesión pública el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, firmando al calce la Consejera Presidenta y el Secretario del Consejo General, quien da fe de lo actuado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, fracción VIII y 60, fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.



Lic. Diana Talavera Flores  
Consejera Presidenta



Lic. Bernardo Valle Monroy  
Secretario Ejecutivo